



Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Distr. general
5 de julio de 2017
Español
Original: español

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

68° período de sesiones

23 de octubre-17 de noviembre de 2017

Tema 4 del programa provisional

**Examen de los informes presentados por
los Estados partes en virtud del artículo 18 de
la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer**

Lista de cuestiones y preguntas relativa a los informes periódicos octavo y noveno combinados de Guatemala

Adición

Respuestas de Guatemala*

[Fecha de recepción: 19 de junio de 2017]

Nota: el presente documento se distribuye únicamente en español, francés e inglés.

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

17-11191X (S) 060717 110717



Se ruega reciclar



Presentación

1. Este informe detalla los avances, limitaciones y obstáculos que encuentra el país para dar cumplimiento, ampliación y respuesta a la lista de cuestiones enviada por el Comité de CEDAW al 8º y 9º informe.

Marco Constitucional y legislativo y armonización de la legislación

2. En el año 2016 impulsada por los presidentes de los tres Organismos del Estado, con el apoyo de la Secretaría Técnica¹ del Diálogo Nacional, se redactó la iniciativa de ley 5179 que propone aprobar las reformas a la Constitución Política de la República. La reforma a los artículos 205 y 208 reconocen la igualdad de género y los principios de carrera judicial a través del acceso en igualdad de oportunidades como garantías de representación.

3. La reforma constitucional al artículo 205 incorpora la carrera profesional, el respeto a la pluriculturalidad e igualdad de género y la asistencia legal gratuita en todas las ramas de la administración de justicia. La importancia de la independencia de magistrados y magistradas pasa por una selección y nombramiento según méritos y calidades profesionales y de integridad, siendo las oportunidades abiertas, igualitarias y no discriminatorias.

4. Dentro de la propuesta de reforma al artículo 208 sobre la Carrera Judicial, se encuentran la imparcialidad, objetividad, transparencia, publicidad, méritos, estabilidad y especialización. A través de la meritocracia, se justifica la paridad como mecanismo de observancia obligatoria para que las mujeres accedan en condiciones de igualdad dentro de la carrera judicial.

5. Como parte de la reforma a Ley Electoral y de Partidos Políticos se sometió a la aprobación la iniciativa de ley 4974 que incorpora los criterios de paridad y alternancia entre mujeres y hombres como parte sustantiva de la ley, así como en la existencia y funcionamiento de los partidos políticos y la postulación y representación de candidatos. En el año 2016 el Congreso de la República por mayoría decidió excluir los artículos relacionados con la paridad de género en todos los niveles.

6. Con el decreto 18-2016 se realizaron reformas a la ley Orgánica del Ministerio Público (MP), Decreto 40-94 para la creación y reconocimiento de las Fiscalías: a) Delitos administrativos, b) de adolescentes en conflicto con la ley penal, c) contra la trata de las personas, d) contra el delito del Femicidio y e) de la niñez y adolescencia. para mejorar la coordinación y la desconcentración de funciones, se crea la Coordinación Nacional que tendrá a su cargo la articulación con los fiscales regionales.

7. Las instituciones vinculadas a los derechos de la mujer indígena y para prevenir y erradicar el racismo por razón de etnia son parte del mandato de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI). La DEMI tiene como mandato la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y brinda servicios de asistencia jurídica, social y psicológica. Estas acciones se vinculan a los ejes de la PNPDIM2 sobre Equidad Jurídica, Identidad en el Desarrollo Cultural y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Desde el año 2,008 ha ido

¹ Esta se encuentra integrada por el Ministerio Público (MP), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) y la Oficina Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.

² Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres.

aumentado la cobertura para la atención a mujeres indígenas en dos departamentos más, teniendo atención a mujeres indígenas víctimas de violencia contra la mujer en 13 sedes regionales y la sede central.

8. CODISRA enfoca la formulación y procesos de formación para erradicar el racismo y la discriminación, así como el acompañamiento a personas y organizaciones indígenas en procesos de discriminación. Ha realizado mesas de diálogo para analizar el rol del Estado en el marco de la iniciativa de ley 5247, que busca reconocer la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas y en específico, los derechos de autor de las tejedoras mayas. Estas acciones y el quehacer de la Comisión están vinculados al Eje 7 de Racismo y Discriminación contra las Mujeres, al Eje 8 de Equidad e Identidad en el Desarrollo Cultural y al Eje 12 de Identidad Cultural de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xincas dentro de la PNPDIM.

9. En materia de diversidad sexual, derivado de la audiencia temática sobre “Discriminación por Orientación Sexual en Guatemala” dentro del 146 período ordinario de sesiones de la CIDH, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) impulsa desde el 2013 la Mesa Técnica Interinstitucional de Seguimiento a los Compromisos Asumidos por el Estado ante el Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos de la población LGBTI, conformada por instituciones y sociedad civil. Para el 2017 se retomarán las líneas de Acción de la Mesa Técnica Interinstitucional de Atención al Tema LGBTI las siguientes:

a) Firma del Acuerdo Interinstitucional: Dará seguimiento técnico a los acuerdos asumidos por el Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano y Sistema Universal de Derechos Humanos; asimismo coordinará acciones con instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar capacidades en el ámbito de la prevención, promoción y protección de los derechos humanos en favor de las personas LGBTI;

b) Construcción de la propuesta de política pública para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las comunidades lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales LGBTI en Guatemala.

Acceso a la justicia y mecanismos jurídicos de denuncia

10. La ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer Decreto 22-2008 establece que el MP debe crear una fiscalía especializada en los delitos contra la vida e integridad física de la mujer. Con la creación de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en el 2016 se persigue fortalecer la promoción de la investigación, persecución y acción penal con enfoque de género, los delitos que atenten contra la vida de las mujeres a nivel nacional. Complementa las acciones de la fiscalía, la Instrucción general del MP06-2013 para la investigación criminal, con una metodología de trabajo para fortalecer y guiar la investigación, la persecución penal y/o tentativas de femicidio.

11. Dentro de los casos ingresados al MP de mujeres agraviadas durante el período del 2009 al 2016 el número de denuncias tuvo incremento del 135.62%. El número de sentencias experimentó un aumento de 38762 denuncias, mientras que las resoluciones pasaron de 82 sentencias a 2703. Con respecto al porcentaje de casos ingresados y el número de sentencias emitidas se dio un crecimiento porcentual del 30.09%. Se pasó de tener 3797 casos y 82 sentencias a 8381 casos y 2703 sentencias (Anexo 1, Tabla 1). Dentro de las sentencias absolutorias y condenatorias, el incremento ha sido del 16%. Los departamentos con mayor número de denuncias son los más poblados como Guatemala (6510) y Quetzaltenango (1488) y departamentos con alta población indígena, como Huehuetenango (1332) y Sololá (1078).

12. Conforme a mecanismos de prevención, la DEMI en el 2012 implementó la Estrategia de abordaje comunitario con perspectiva étnica y de género para la prevención de violencia contra las mujeres indígenas y su familia con el objetivo de desnaturalizar el ejercicio de violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario. Propone la inclusión de las mujeres indígenas, su familia, la comunidad, las autoridades indígenas, estatales y sociedad civil, promoviendo la prevención, la participación y la organización comunitaria. Como mecanismo de denuncia de casos de discriminación por razón de género y etnia, a partir del 2010 se utiliza el Manual de Litigio en casos de discriminación racial, étnica y de género, que contribuye a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos. Se han atendido un total de 31 casos de discriminación, logrando así la accesibilidad, y disponibilidad de asesoramiento integral a través de atención legal, social y psicológica a las mujeres indígenas en todos los ámbitos del derecho. Desde su creación se atendieron a más de 60 mil mujeres indígenas.

13. Para la implementación de la Política Institucional para la Defensa Técnico Legal con Enfoque Intercultural, Perspectiva de la Mujer Indígena y enfoque de Género para el acceso a la justicia, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) tiene sedes en 15 municipios y una cobertura lingüística de 12 idiomas mayas. Se coordinó con la CODISRA, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la DEMI, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, la formación de defensores/as públicos con enfoque intercultural en el ámbito nacional para acompañar permanentemente procesos con pertinencia cultural. Entre el 2009 y el 2017 se han capacitado a 6 mujeres indígenas, 66 autoridades indígenas, 73 empleados/as del IDPP y 36 operadores/as de justicia. Se han atendido 154 casos de mujeres con enfoque intercultural. Los departamentos con mayor atención fueron los de Huehuetenango (72), Quiché (29), Totonicapán (23) y San Marcos (21) de mayoría de población indígena.

Las mujeres y la paz y la seguridad

14. La evaluación de estos 20 años de aplicación de los Acuerdos de Paz, el proceso de reconciliación y justicia transicional comprenden 1) el reconocimiento de los hechos e investigación por parte del Estado, 2) la institucionalización de la reconciliación y el resarcimiento 3) la coordinación interinstitucional y reconocimiento de casos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos 4) medidas de reparación y justicia transicional en casos de delitos de desaparición forzada, delitos contra los deberes de la humanidad, esclavitud sexual y doméstica, tortura y abusos sexuales.

15. A nivel institucional, el Acuerdo Gubernativo 258-2003 y sus reformas, crea la Comisión Nacional de Resarcimiento y el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) con representantes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. El PNR reconoce como medidas para la reparación integral de las víctimas: 1) la dignificación de las víctimas mediante acciones de apoyo a exhumaciones, inhumaciones y medidas de verdad y memoria, 2) resarcimiento cultural, 3) reparación psicosocial y rehabilitación, 4) resarcimiento económico 5) resarcimiento material. El PNR en el 2013 ejecutó Q 60.97 millones; en el 2014 aumentó a Q 171.07 millones; disminuyendo al 2015 en 90.35 millones (Anexo 1, Tabla 2).

16. A través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el MP se implementa la exhumación de los cementerios clandestinos. La PDH reportó que el PNR al 2011 había recibido 50802 casos. La COPREDEH figura como la entidad responsable de llevar los procesos interpuestos contra el Estado en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Durante el período del 2004-

2016 realizaron 83 actos de dignificación ante la CIDH y 33 ante la Corte Interamericana.

17. La investigación y condena comienza con la instalación de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP. Se aprueba por parte del Congreso de la República mediante el Decreto 3-2012 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se conforma en el 2014 la Red de Instituciones por la Paz, integrada por la SEPAZ, SEPREM, CODISRA, DEMI y Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) con el apoyo del PNUD.

18. El 10 de mayo de 2013 el político y militar retirado José Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel y hallado culpable de genocidio y de crímenes contra la humanidad cometidos en contra de la población Ixil. Diez días después, la Corte de Constitucionalidad (CC) señaló errores en el proceso judicial, anulando la sentencia y ordenando un nuevo proceso. La CC anuló el 19 de mayo de 2013 por vicios de procedimiento, la sentencia condenatoria así como todo lo actuado hasta antes del 19 de abril de 2013.

19. La Jueza lo declaró incapaz para seguir el juicio debido a su condición médica y no estar en uso de sus facultades mentales; y debe enfrentar el proceso a través de la representación de su abogado (noviembre de 2016). Según el INACIF padece de un deterioro cognitivo que le impide rendir adecuadamente en términos de pensamiento y juicio que por su edad continúa en deterioro. De conformidad con la resolución de jueza, de 31 de marzo de 2017 se ordenó un juicio especial contra el Efraín Ríos Montt, quien ya se ha declarado que padece demencia. Se está a la espera de la fecha del debate oral y público, el cual tendrá medidas de seguridad como llevarlo a cabo a puerta cerrada y solamente con presencia de los abogados defensores.

20. En el 2014 se inició el caso Sepur Zarco y en el 2016 se emitió la sentencia C-01076-2012-00021 por 120 y 240 años de prisión contra los ex militares Esteelmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdéz Asij. La condena fue por delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual en contra de 1) Rosa Tiul, 2) Candelaria Maas Sacul, 3) María Bá Caal, 4) Manuela Bá, 5) Felisa Cuc, 6) Vicenta Col Pop, 7) Margarita Chuc Choc, 8) Cecilia Caal, 9) Magdalena Pop, 10) Carmen Xol Ical, 11) Demecia Yat y 12) Dominga Coc. b) Asesinato en contra de la integridad física de: 1. Dominga Coc y/o Dominga Cuc y/o Dominga Choc y en contra de las niñas: 2. Anita Seb Coc y/o Anita Coc Seb y 3. Hermelinda Coc y/o Herlinda Coc Seb y, c) Delitos contra los deberes de la humanidad de atentar en contra de la dignidad personal especialmente tratos humillantes y degradantes, en agravio de las menores: 1. Anita Seb Coc y/o Anita Coc Seb y 2. Hermelinda Coc y/o Herlinda Coc Seb. 2.) A Heriberto Valdez Asigse le condenó por los delitos de: a) Desaparición forzada en contra de la integridad física de: 1. Antonio Sub Coc y/o Antonio Sub Cac, 2. Manuel Cac, 3. Santiago Cac Bá, 4. Pedro Cac Bá, 5. Abelardo Coc, 6. Heriberto Coc Tzi Heriberto Choc y/o Eriberto Choc, 7. Juan Choc, y b) delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual en agravio de: 1) María Bá Caal y 2) Carmen Xol Ical.

21. Dos casos se encuentran pendientes de resolución de sentencia: 1) Creompaz, en el que se encuentran imputados diez exoficiales del Ejército de Guatemala por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. La acusación deviene del análisis forense y pruebas de ADN a 97 casos, 2) Desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen, así como tortura y abusos sexuales contra su hermana, Emma Guadalupe. El hecho ocurrió en 1,981, cuando el Ejército vestidos de particular, llegaron a su casa y se llevaron al menor Marco Antonio. En el 2004 el Estado reconoció su responsabilidad ante la CIDH y se comprometió a buscar a la víctima e investigar y sancionar a los responsables

materiales e intelectuales del hecho. La investigación del MP ha durado cerca de 10 años teniendo a cinco procesados que enfrentan cargos por delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada.

22. Como medidas específicas adoptadas para resarcir a las mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado interno, el Estado adoptó la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En 2016 se formuló el Plan de Acción Nacional. La SEPREM brindará el acompañamiento técnico y metodológico para su implementación. Se conformó la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ), integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) y ha contado con la participación del Ministerio de Gobernación (MINGOB), Ministerio de la Defensa, la Secretaría de la Paz (SEPAZ), Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), COPREDEH, CODISRA, DEMI, el Organismo Judicial (OJ), MP, PDH, sociedad civil y ONU Mujeres. A partir de 2017 la conducción del mecanismo se trasladará a la SEPREM. La DEMI a través de la Estrategia de Abordaje Comunitario implementó en tres de los departamentos con más índices de violencia sexual durante el conflicto armado interno: Quiché, Baja Verapaz y Alta Verapaz, el cumplimiento a la resolución.

23. En el 2010 se emitió el Plan de Reparación de Daños y Perjuicios Sufridos por las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. Se aprobó a través del acuerdo gubernativo 378-2014 la Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, como resultado del proceso de negociación entre la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy y el Gobierno de Guatemala, suscribiéndose el Informe de Identificación y Verificación de los Daños y Perjuicios. Se estableció un compromiso político del Gobierno y otras entidades involucradas en el proyecto hidroeléctrico de adoptar las medidas de reparación. Los compromisos se aplicarán y beneficiarán a 33 comunidades de 6 municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Quiché. El monto total de resarcimiento será de Q 200 millones para resarcir a 3329 familias.

24. Dentro de los desafíos pendientes de los Acuerdos de Paz, se encuentra la aprobación de la iniciativa de ley 3590 que propone la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ratificar la Convención Internacional contra la desaparición forzada y atender el llamado de la CIDH a reformar la ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad Decreto 1-86. Es necesario dotar de certeza legal y presupuestaria al PNR e implementar un sistema de información y registro nacional de víctimas, dotar de asesoramiento jurídico a sus familiares ante los órganos de justicia e implementar y fortalecer mecanismos de atención hacia víctimas de violencia y violación sexual.

Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

25. La SEPREM según Acuerdo Gubernativo 200-2000 es la entidad asesora y coordinadora de políticas públicas para promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas y el fomento de una cultura democrática. En el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 definió la asistencia técnica a la institucionalidad pública conforme a) la gestión de políticas en el territorio; b) la condición jurídica de las mujeres y c) la gestión de la información para el análisis de las políticas públicas. En noviembre de 2016 se reactivaron el Gabinete Específico de la Mujer (GEM), la Comisión de la Mujer en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), el Consejo Consultivo de la SEPREM y la Mesa Interinstitucional del Presupuesto para la Equidad entre Hombres y Mujeres.

26. A través del CONADUR, el Punto Resolutivo Número 05-2016 creó la Comisión de Alineación, Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032 que le dará seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y cualquier otro compromiso internacional sobre la mujer y pueblos indígenas. Con respecto al Objetivo 5 de lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas se priorizaron todas metas e indicadores, salvo la relacionada con la meta 5.6 y los indicadores 5.6.1 y 5.6.2 que esperan medirse mediante la meta 3.7 y reforzar los indicadores 3.7.1 y 3.7.2. Además, la SEPREM ha incorporado el enfoque de interseccionalidad de derechos en los procesos institucionales y ha identificado la gestión de agendas estratégicas para responder a las demandas que presentan mujeres viviendo con VIH, grupos LGBTI, mujeres de la tercera edad, mujeres migrantes y mujeres con discapacidad.

27. Mediante los Acuerdos Gubernativos 264-2012 y 259-2013 se crea y modifica el Gabinete Específico de la Mujer para instituirlo como un espacio de coordinación interinstitucional para la toma de decisiones sobre procesos relacionados con la equidad entre hombres y mujeres. Su estructura se ha replanteado de tal forma, que se cuente con dos ámbitos de gestión: 1) nivel político estratégico; 2) político técnico. Además, se ha definido una estrategia operativa del Gabinete para construir una agenda sustantiva y dar seguimiento a la misma.

28. Mediante el Acuerdo Gubernativo 260-2013 se acordó la implementación de unidades de género en los ministerios y secretarías del Organismo Ejecutivo. Cada una deberá implementarla dentro de su estructura organizativa, adscrita al Despacho Superior, sirviendo como órgano de coordinación y enlace técnico con el Gabinete Específico de la Mujer. Al año 2016 se cuentan con 32 de unidades. Para fortalecer los criterios del clasificador temático, se constituyó una Mesa Interinstitucional del Presupuesto para la Equidad entre Hombres y Mujeres, conformada por el MINFIN, la SEGEPLAN y la SEPREM con el acompañamiento de la Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala.

29. La estrategia de territorialización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) conlleva el fortalecimiento de la presencia en la SEPREM en los territorios. Se ha fortalecido el trabajo con las Direcciones Municipales de la Mujer y el traslado de capacidades para la vinculación de las acciones priorizadas del gobierno local a través de la herramienta del Clasificador Presupuestario de género.

30. El presupuesto vigente de la SEPREM ha tenido a partir del año 2009 a 2017 un aumento periódico y sostenible. Conforme al Presupuesto General del País, oscila entre el 0.04% y el 0.05%. Conjuntamente con el presupuesto de la DEMI, el porcentaje se encuentra entre el 0.06% y 0.07%. El 2017 será el último año que aparece presupuestariamente la CONAPREVI dentro de la SEPREM. En el próximo presupuesto, podrá identificarse la partida presupuestaria dentro del Ministerio de Gobernación (MINGOB) en el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito. El aumento registrado es de Q 5.81 millones. El fortalecimiento institucional reviste importancia también frente a las fuentes de financiamiento. En el 2013 recibió fondos por parte de las agencias cooperantes de España y Suecia (Anexo 1, Tablas 3 y 4).

31. Con respecto a la aprobación del Ministerio de la Mujer, el 23 de julio de 2015 fue presentada la iniciativa número 4977 que contiene la propuesta de reforma al Decreto 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo. Con fecha 27 de junio de 2016 la Comisión de la Mujer del Congreso de la República emitió dictamen favorable a la iniciativa presentada, solicitando que la misma fuera aprobada por el Congreso de la República. Al 2017 no ha sido conocida por el pleno.

32. Dentro de los mecanismos de coordinación entre la DEMI y la SEPREM se encuentra el Consejo Consultivo, integrado por los ministerios de Estado e instituciones o dependencias responsables de ejecutar políticas públicas para el desarrollo de la equidad entre hombres y mujeres o que tengan planes de acción en beneficio de las mujeres. Ambas instituciones participan en la CONAPREVI y en la Mesa 8j, coordinada por el Departamento de Coordinación con Pueblos Indígenas y Sociedad Civil del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y en la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos (CNAA) instalada a partir de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de los Servicios de Planificación (Decreto 87-2005).

Medidas especiales de carácter temporal

33. La SEPREM ha identificado la necesidad de instituir el Sistema Nacional para la Equidad entre Hombres y Mujeres. Se conformará por dos ámbitos de gestión: 1) Política: para la concertación de sinergias y seguimiento de mecanismos para fomentar el desarrollo integral de la mujer, garantizar sus derechos humanos y promover la equidad entre hombres y mujeres 2) Técnica: para la gestión y seguimiento del instrumental normativo y de política pública vinculado a fomentar el desarrollo integral de la mujer, garantizando sus derechos humanos y promoviendo la equidad entre hombres y mujeres.

34. El Sistema incorporará la coordinación, la gestión política y mecanismos técnicos institucionales para el seguimiento de políticas públicas para la equidad entre hombres y mujeres. Será el ente rector y encargado de verter las orientaciones para transversalizar el enfoque de equidad entre hombres y mujeres en todas las aristas del desarrollo.

Estereotipos

35. Se lanzó la campaña de comunicación “Menos victimización, Más empoderamiento” con el objetivo de brindar información a las mujeres sobre participación, prevención, derechos de la mujer, eliminar actitudes de victimización, fortalecer el discurso de empoderamiento y socializar las guías de acompañamiento para las mujeres. La campaña consiste en conjunto de acciones comunicacionales de incidencia a través la sensibilización para el empoderamiento de las mujeres y la participación activa de hombres y mujeres organizados a nivel municipal, departamental y nacional.

Violencia de género contra la mujer

36. Dentro de los mecanismos de prevención, en el año 2016 se reactivó la CONAPREVI. Su institucionalización se redireccionó hacia el Ministerio de Gobernación, dentro del Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito.

37. En el 2017 se inicia la construcción de la Encuesta Violencia Contra la Mujer (VCM). Servirá para formular políticas preventivas y de atención, incluyendo a mujeres que cuentan con alguna discapacidad como parte de las consecuencias de la violencia. Su implementación requiere un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y SEPREM.

38. Mediante el Decreto 21-2016 se aprobó la ley orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito que coordinará con la CONAPREVI para garantizar la atención integral especializada a las mujeres, a través de los Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de la violencia (CAIMUS). Asimismo, lo hará con las entidades e instituciones especializadas en la atención integral a víctimas en condición de vulnerabilidad que, por razón de su edad, identidad de género, sexo, estado físico y mental, o por circunstancias sociales,

económicas, étnicas y/o culturales. El objetivo consiste en promover la justicia y respeto a las mujeres en su dignidad, intimidad e identidad, protección durante todo el desarrollo del proceso penal, preservando su vida, integridad física y estabilidad psicológica. La atención estará a cargo de profesionales de su mismo sexo y tendrán derecho a no ser objeto de exploración física sin su consentimiento explícito, tiene derecho a no ser discriminada por estereotipos, prejuicios y/o estigmas sociales, a no sufrir la revictimización y a ser atendida y asistida en su idioma materno.

39. En el 2016 se suscribió un Convenio de Q 9.5 millones entre el MINGOB y la Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) para continuar apoyando el funcionamiento de los CAIMUS. En el 2017 se incrementó a una asignación de Q 20.5 millones para apoyar la ampliación de los CAIMUS que operaban en cinco departamentos del país. Para el año 2016 se atendieron por primera vez a 2475 y 8910 mujeres en seguimiento. A mayo de 2017 se han atendido a 411 mujeres por primera vez y 1960 mujeres en seguimiento.

40. La SEPREM por medio del Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI) ha tenido como objetivo sensibilizar, informar y atender en temas de prevención de la violencia intrafamiliar para fomentar y asegurar un clima de paz y disminución de la violencia. En el año 2016 el programa benefició a 2697 personas (1795 mujeres y 902 hombres) por medio de terapias de orientación y asesoramiento integral, que incluye asesoría social, psicológica y legal, a víctimas de violencia intrafamiliar, en modalidades de terapia individual, de pareja, familiar, grupos de autoayuda y por medio del Teléfono de Ayuda Familiar (TAF) 1515. También contribuyó en la sensibilización de 27188 personas (13177 alumnas y 14011 alumnos) del sistema educativo nacional en 5 municipios por medio de talleres en los que se aborda la prevención de la violencia intrafamiliar y en contra de la mujer. Asimismo, en este tema se sensibilizó a 1689 personas (1123 mujeres y 566 hombres) entre servidores públicos y población en general.

41. Las funciones de atención y servicio del PROPEVI requieren de un abordaje institucional integral que cumpla con sus objetivos por lo cual debe adscribirse a una dependencia que ejecute acciones de primera línea que permitan atender a las necesidades y demandas de la población con relación a la violencia intrafamiliar. Se ha propuesto que sea el Tercer Viceministerio del Ministerio de Gobernación, encargado de la Prevención de la Violencia y el Delito, a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) como la institución idónea por su marco legal, técnico y político.

42. Dentro de los mecanismos de justicia, en noviembre de 2014 el MP implementó el Protocolo de Atención Integral para las víctimas del delito en las Oficinas de Atención a la Víctima con el fin de fortalecer y ampliar las capacidades institucionales de coordinación y comunicación interna con el OJ y la PNC. El MP aplicó el Modelo de Atención Integral en las fiscalías que señala las secuencias de acciones para la atención integral de víctimas del delito. La atención integral, plural y multicultural, hace especial énfasis en la atención diferenciada por edad, sexo, discapacidad, identificación étnica y condición migratoria. El MP cuenta con 67 intérpretes de 20 idiomas mayas diferentes.

43. Los expedientes conocidos por las Fiscalías de Distrito y Municipales en los que existan víctimas mujeres deberán ser trasladados a la Fiscalía contra el delito de Femicidio. Es obligación de todos los equipos fiscales, aplicar y desarrollar los procedimientos establecidos en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género.

44. Las fiscalías tienen la responsabilidad y obligación de mantener el contacto directo con las víctimas e informar en todo momento sobre el avance de la investigación. Cuando se determine que la muerte violenta de una o varias niñas,

adolescentes o mujeres adultas se haya producido por integrantes de grupos delictivos organizados u organizaciones criminales y/o pandillas, el expediente deberá ser trasladado de mesa técnica a la fiscalía contra el delito de femicidio. Deberá brindarse la atención victimológica y una atención integral a víctimas del delito de acuerdo a las necesidades de las víctimas. El equipo de la unidad de atención a la víctima apoyará a los fiscales en brindar atención a la víctima directa, indirecta y colateral y de elaborar informes, estudios o dictámenes que fortalezcan las medidas de reparación digna y transformadora.

45. La violencia criminal contra la mujer ha disminuido entre el 2009 y 2016, con una reducción anual de homicidios del 22.84% mientras que las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego presentaron un descenso del 12.34%. En términos porcentuales los homicidios causados por arma de fuego descendieron un 2% en comparación al 2009 mientras que las necropsias realizadas por muerte producida por arma de fuego se redujeron del 90% al 68% (Anexo 1, Tabla 5).

46. Dentro de las medidas especiales adoptadas para prevenir y eliminar la violencia, los malos tratos, el abuso y el abandono de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) según Acuerdo Gubernativo 78-2009 es el ente de Estado responsable de velar por la implementación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y de la redacción de informes periódicos ante las Naciones Unidas. A partir de la evaluación inicial de Guatemala en el 2016 sobre el cumplimiento de la CDPD, se realizó el Plan de Acción Nacional que delimita las estrategias que las instituciones de Estado deben realizar en función del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La SEPREM elaboró una agenda estratégica para mujeres con discapacidad que desprende de los lineamientos contenidos en el Plan de Acción Nacional y orientó sus contenidos desde una óptica de interseccionalidad de derechos.

47. En la estrategia de acción contra la explotación, la violencia y el abuso, se define que, si bien los sistemas de aplicación de justicia funcionan en la regularidad de servicios y atención a la ciudadanía, hasta ahora no existen sistemas de prevención y protección de la violencia contra la mujer, niños y niñas con discapacidad. El objetivo es establecer canales de atención y denuncia, así como el mecanismo de investigación para prevenir y proteger a las personas con discapacidad (PCD) de la explotación y formas de abuso y violencia sexual de mujeres, niños y niñas.

48. Conforme a la esterilización forzada, la Ley de Desarrollo Social señala que la salud reproductiva es un principio básico y debe ser promocionado por el Estado. Aunque no se tiene un registro o estadísticas consolidadas, esas libertades tienden a vulnerarse principalmente en PCD y en particular a prácticas de esterilización y abortos coercitivos. La estrategia de acción señala como prioridad contribuir a la eliminación de prácticas de salud reproductivas que vulneren los derechos y libertades de las PCD. La propuesta es coordinar con el MSPAS programas de educación y divulgación para la atención de salud reproductiva y atención a las PCD, desarrollar en conjunto con las Unidades de Género de las entidades públicas y municipalidades programas de educación y divulgación sobre los derechos de la salud reproductiva.

49. En el Congreso de la República se encuentra pendiente de tercera lectura la aprobación de la iniciativa 5125 que propone aprobar la ley de personas con discapacidad. La iniciativa dispone la creación de la Secretaría Presidencial sobre asuntos de Discapacidad con funciones de coordinación, promoción y diseño de la política pública de personas con discapacidad. Se dispone que el 3% del presupuesto

del MSPAS se utilice para proveer de ayudas técnicas a las personas con discapacidad.

Trata, explotación y violencia sexual

50. Con el apoyo de las Embajadas de Estados Unidos de América y de Francia, se inició en el 2013 como instrumento especializado para establecer los parámetros de detección e identificación de víctimas de trata en los centros de trabajo, el Protocolo de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo (MINTRAB). Asimismo, se conformó la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana y Belice. En agosto de 2016, el Estado de Guatemala asume la campaña “Corazón Azul”, impulsada por la UNODC (del inglés United Nations Office on Drugs and Crime) que prevé realizar talleres de sensibilización a fiscales del MP, agentes de la PNC, y población en general para combatir la Trata de Personas. Con el apoyo de UNFPA se permitió crear en los albergues temporales, las áreas de clínica médica, salón de belleza, centro de computación, centro de corte y confección para presuntas víctimas de trata.

51. Durante el año 2013 la SVET realizó el monitoreo y seguimiento de casos a presuntas víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera y nacionales detectadas y rescatadas en Guatemala. Entre las medidas de reparación no materiales, se encuentran las de “restitución”, que tienen como objetivo devolver a la víctima al estado en el que se encontraba antes de que le fueran vulnerados sus derechos. En cumplimiento con el mandato legal de la SVET, se han implementado y fortalecido institucionalmente los Albergues Temporales Especializados para la atención a víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas en Guatemala (Guatemala), Cobán (Alta Verapaz) y Coatepeque (Quetzaltenango). Las personas atendidas en los albergues temporales especializados, según género, lugar de procedencia a nivel nacional como extranjeros y pertenencia en el período 2014 al 2017 han sido de 114 hombres y 760 mujeres, siendo 36 extranjeros y el resto nacionales. El mayor número de personas se ubican en los departamentos de Guatemala (176), Alta Verapaz (124) y Quetzaltenango (76). Étnicamente el mayor número son las personas no indígenas (576) frente a las indígenas (298).

52. Dentro de los albergues se brinda a las víctimas, atención médica, educativa y nutricional, así como apoyo y acompañamiento psico-social a las víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas. Se les brinda soporte en las audiencias y en las diligencias judiciales como parte del proceso de medidas de protección. Estas acciones conllevan facilitar a las víctimas de violencia sexual, apoyo y orientación en la formulación de su proyecto de vida como medio de reinserción a la vida social. Para darle un soporte económico a las mujeres víctimas de violencia sexual (específicamente a niñas y adolescentes embarazadas o madres), se les incorpora al programa social “Bono Seguro para la Salud”, en coordinación con el MIDES (ver apartado 79).

53. La SVET ha traducido la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas a 17 idiomas mayas con el apoyo de la Academia de Lenguas Mayas, atendiendo así la atención a la multiculturalidad y pluriculturalidad. Elaboró el Programa Nacional de Información y Sensibilización y el Protocolo de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en delitos contra la violencia sexual, explotación y trata de personas desde un enfoque de pertinencia cultural.

54. Mediante el Decreto 28-2010 se instala el Sistema de Alerta Alba Keneth, como un sistema de alerta temprana para lograr de forma eficaz y expedita la localización y resguardo inmediato de niñez y adolescencia sustraída o desaparecida

para protegerlos contra el secuestro, trata, venta o para cualquier otro fin o forma. El sistema se reformó mediante el Decreto 5-2012 constituyendo la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba Keneth, integrada por la PGN, PNC, Dirección General de Migración, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República y el MP. Esta modificación añade al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) y SVET. Además, constituye la Unidad Operativa dentro de la PGN, teniendo como funciones, la de planificar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización, resguardo y seguimiento. Asimismo, deberá elaborar un registro de información que facilite la denuncia, información, seguimiento y búsqueda de casos.

55. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la Política Institucional en materia de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia en el 2015. Dentro de los avances se desarrolló el Sistema Informático de Tribunales, reportando durante el año 2014 el ingreso de 1471 expedientes por delitos de violación y agresión sexual, en el 2015 de 2966 y en el 2016 de 4250 expedientes. Mediante la iniciativa de ley 5178 presentó la disposición de aprobar el registro nacional de agresores sexuales y banco de datos genético.

56. Para la investigación y persecución penal del delito de trata de personas en el MP, crea una unidad especializada adscrita a la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado en el 2007. A partir del 2012 se acordó el reglamento de organización y funciones de la Fiscalía de Sección contra la trata de personas con cuatro unidades y agencias regionales: 1) sobre la Venta de Personas y Adopciones Irregulares, 2) Contra la Explotación Sexual, 3) Contra la Explotación Laboral y otras medidas de trata de personas y 4) la Unidad de Atención Integral.

57. El Protocolo de Actuación Para la Atención de Víctimas de Delito de Trata de Personas, fue aprobado por el MP en el 2015, establece los procedimientos de actuación para la atención, protección, referencia y reparación integral de los derechos de las personas que han sido víctimas del delito de trata de personas. Asimismo, creó el Manual de Atención y Referencia a Víctimas de Delito en las Redes de Derivación. Este con el objetivo de ofrecer un complemento al marco de atención integral a la primera atención que brinda el MP, y como referencia y seguimiento a las víctimas de delito por parte de organizaciones e instituciones que integran las redes de derivación.

Participación en la vida política y pública

58. Existen una serie de factores que limitan la participación política de las mujeres que son inherentes la cultura política, el acoso y violencia, la estructura de los partidos políticos, el marco legislativo y la elegibilidad. Entre los principales desafíos que enfrentan las mujeres se encuentra la promoción del derecho a la paridad, alternabilidad y representatividad de las mujeres en su diversidad, tomando en consideración un enfoque de interseccionalidad de derechos. A pesar de que se ha incrementado el número de mujeres en el padrón electoral de 1999 al 2015 en un 53%, la representación en los cargos de elección popular no refleja mayores avances entre las postulaciones y elección de representantes. Las mujeres en la elección del 2011 representan el 15% como postulantes frente a sus pares hombres y en la siguiente elección solo suben un 2%. Las candidatas electas solo fueron el 8% y 10% para cada elección (Anexo 1, Tabla 6).

59. Los mayores avances en torno a paridad en la representación se han dado en el Organismo Judicial. Las mujeres nombradas como jueces de paz son el 41% (182), las juezas de primera instancia el 46% (147), las juezas de tribunales de sentencia tienen el 38% (191), igualmente las magistradas de salas con 39% (123). Finalmente, las magistradas la cantidad de juezas y magistradas de los órganos

jurisdiccionales suman el 54% (456). El Organismo Ejecutivo ha experimentado una leve mejoría en la inclusión de mujeres como ministras o viceministras. Para el período 2016-2020 fueron nombradas seis (20%) mejorando la medición inicial del 2012 con el 14%. Dentro del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores hay 258 cargos diplomáticos, de los cuales 132 (51%) son ocupados por hombres y 126 (49%) por mujeres.

60. El Congreso de la República no aprobó el sistema de cuotas dentro de la iniciativa de ley 4974. Los representantes de organizaciones de la sociedad civil hicieron entrega de una nueva propuesta de reformas a la ley electoral que el Presidente de la República presentó como iniciativa de ley de reformas de cuarta generación. El borrador en poder de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, propone nuevamente las cuotas de representación a los candidatos por los sistemas de Distrito Electoral, Listado Nacional y Parlamento Centroamericano señalando que deberán estar integradas por hombres y mujeres con al menos el 30% de representación para cada uno y que en ningún caso podrán ir dos personas del mismo sexo de manera consecutiva.

61. Las medidas que se han adoptado para incrementar la participación electoral residen en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ha formulado el Plan Estratégico Institucional 2014-2020 en el que define como política, el establecimiento de acciones que coadyuven al incremento de la representación y participación ciudadana de las mujeres mayas, garífunas, xincas y mestizas en los procesos electorales y de organizaciones políticas. Aprobó mediante el acuerdo 154-2010 la ejecución del proyecto de Promoción para Elevar la Participación de las Mujeres en el Ejercicio de la Ciudadanía y el seguimiento a la Red Multiplicadora de Mujeres, trabajando y fortaleciendo la formación y las capacidades de las lideresas en temas políticos y de ciudadanía. Han realizado a partir del año 2013 talleres a nivel nacional relacionados con la capacitación de aproximadamente 500 lideresas a nivel departamental y municipal en derechos cívicos y participación electoral. En 2015 el TSE mediante el Acuerdo 113-2015 sancionaron por primera vez, la utilización de estereotipos sexistas en la realización de actividades de propaganda electoral, estableciendo un precedente en actos de violencia política en contra de la mujer.

62. Como parte de las medidas provistas para proteger a las defensoras de los derechos humanos y periodistas, se dio inicio al proceso para la elaboración de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos con el respaldo de los tres Organismos del Estado, el MP, PGN y PDH. Conforme a las medidas jurídicas, el artículo 30 del Decreto 40-94, establece la Fiscalía de Derechos Humanos que ejercerá la acción y persecución penal en los delitos cometidos en contra de los derechos humanos de los habitantes de la República. Esta Fiscalía se encuentra organizada por Unidades Fiscales, entre las que se encuentran la Unidad de Delitos contra Activistas, Unidad de Delitos contra Periodistas, Unidad de Delitos contra Sindicalistas y Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia. De enero a diciembre de 2016 mayo de 2017 a la Unidad de Activistas de Derechos Humanos ingresaron 199 casos, 79 denuncias de mujeres y 120 de hombres. En la Unidad de Delitos contra Periodistas ingresaron 134 casos, 19 denuncias de mujeres y 115 de hombres.

63. Dentro de las acciones implementadas por la División de Protección a Personas y Seguridad se encuentran medidas de seguridad personalizada a funcionarios públicos, personas beneficiadas de medida cautelar, personas amenazadas y testigos protegidos. En el 2016 se encuentran 6 periodistas (5 hombres y una mujer) y 3 defensores de derechos humanos (1 hombre y 2 mujeres) que cuentan con estas medidas de seguridad personalizada.

Educación

64. A partir del 2012 existe el programa de coordinación entre la SVET, MIDES, MINEDUC, MSPAS denominado Ruta de Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas y el programa de Fortalecimiento de la Atención a Niñas Embarazadas menores de 14 años de edad, que añaden a la PGN, el MP y el RENAP. El objetivo principal es que los centros educativos propongan a las niñas y adolescentes las opciones educativas en el sistema escolar o extraescolar para que puedan continuar con sus estudios. Esto consiste en adecuaciones curriculares para que logren la promoción de grado, o bien, su incorporación en establecimientos que les ofrezcan otras modalidades, facilitándoles volver a sus estudios después del parto.

65. Como mecanismos de acceso a la educación bilingüe (español/idioma maya) se ha prestado acompañamiento de la implementación del programa de la atención de niñas indígenas y del área rural, así como del lanzamiento de la segunda fase del proyecto “Vivamos la igualdad en Educación”, de “Todos somos Ajmaq” y los cuadernos de trabajo “Si Aprendemos Conjuntamente Tendremos Mejor Vida” y “Conocemos y Practicamos en Familia los Derechos de las Niñas”. Dentro de las medidas implementadas en materia de educación integral en sexualidad, se diseñaron, validaron y distribuyeron guías docentes, cuadernos de trabajo para madres y padres de familia sobre los derechos de las niñas, guías para el docente en cuatro idiomas mayas sobre el liderazgo de las niñas, derechos de los migrantes y la práctica familiar sobre los derechos de las niñas y niños.

Empleo

66. El MINTRAB ha emitido los acuerdos ministeriales que regulan procedimientos que garantizan la protección de las mujeres: a) El111-2013 sobre el instructivo para atender los casos donde existe denuncia o conocimiento de un cierre o disolución inminente de una empresa o centro de trabajo sin el respectivo pago de prestaciones laborales, b) el 160-2013 que sirve como instructivo para la convocatoria del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) ante un posible caso de cierre de empresa que recibe los beneficios de la ley que favorece la instalación de maquilas y el 161-2013 como instructivo de inspección anual.

67. En el año 2003 se creó la Instancia Coordinadora de la Maquila con el objetivo de coordinar acciones de carácter preventivo mediante la divulgación de derechos laborales dirigidos a trabajadores/as, gerentes y mandos medios de la industria de maquila con el propósito de disminuir las denuncias por violaciones a los derechos laborales. Tienen representación el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la PDH, la DEMI, Organizaciones de mujeres, Comisión de Vestuario y Textil de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). Dentro de los años 2009-2016 se han atendido 8104 denuncias interpuestas por mujeres trabajadoras.

68. Dentro de las medidas para proteger a las mujeres de las prácticas abusivas y ratificar el Convenio No. 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas, en reunión de la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales de Trabajo, creada en el marco del Convenio No. 144 sobre la Consulta Tripartita, los sectores trabajador y empleador, coincidieron en que es necesario regular el trabajo doméstico por considerarse dentro de las peores formas de trabajo infantil. De esa cuenta a través del MINEX, el Gobierno se pronunció favorablemente y remitió el expediente al Congreso de la República. La iniciativa 4981 recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Trabajo. Para el 2,016 la iniciativa se encuentra pendiente de la tercera lectura para su aprobación. Durante el período 2009-2016 se han atendido 1919 casos donde se atendió a mujeres trabajadoras de casa particular sobre denuncias de aguinaldo, bonificación anual para el sector

privado y público, bonificación-incentivo, IGSS y pago de prestaciones por terminación laboral. Por su parte, en el sector agro se atendieron a 135 mujeres sobre el mismo tipo de denuncias.

69. Conforme a las estrategias para erradicar las peores formas de trabajo infantil en niñas, durante el 2016 el MINTRAB en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAPETI) reprogramó de manera participativa la Hoja de Ruta 2016-2020 para erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. Dentro de la reprogramación se ha contemplado la coordinación interinstitucional y la programación operativa entre las instituciones que representan a la CONAPETI. Estas son la SVET, SBS, Organismo Judicial, PNC, PDH y la Inspección General de Trabajo y Unidad de Protección al Adolescente Trabajador (UPAT) del MINTRAB. Asimismo, se trabaja de forma coordinada con FAO en Huehuetenango, donde se identificaron 272 casos de niños, niñas y adolescentes trabajadores bajo las peores formas de trabajo infantil.

70. A través de la Inspección General de Trabajo, en el 2016 se incluyó el Plan Anual de Inspecciones Focalizadas y Regionalizadas, desarrollándose cinco planes específicos en la implementación del Reglamento para la aplicación del Convenio Número 182 de la OIT. Bajo este plan, se realizaron 6072 visitas, identificando 97 niños, niñas y adolescentes bajo las peores formas de trabajo infantil. Con respecto al período 2009-2015 se identificaron 447 casos, de los cuales 90 corresponden a niñas hasta 13 años y mujeres adolescentes entre 14 y 17 años.

71. Dentro de las medidas para promover oportunidades de empleo y generación de ingresos para las mujeres indígenas, rurales y en situación de pobreza, el Servicio Nacional de Empleo realiza acciones de orientación por medio de talleres laborales de fortalecimiento ocupacional, dotándolas de herramientas para su efectiva inserción. Se ejecutan procesos de intermediación laboral donde se vincula la oferta y demanda de empleo por medio de la estrategia de territorialización con las Ventanillas Únicas de Empleo. Además, el MINTRAB lidera la estrategia para la implementación de los Sellos de Equidad de Género, con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad existentes, promueve y motiva al sector público y privado a designar un mayor número de mujeres trabajadoras en puestos de dirección, en mandos medios y altos, partiendo desde la integridad de criterios y la promoción de la equidad de género.

Salud

72. El Plan del Pacto Hambre Cero ha priorizado 166 municipios a partir de los datos de prevalencia de desnutrición crónica. Del total de municipios del país, fueron seleccionados aquellos con una prevalencia de desnutrición superior al 42.8%. El grupo 1 contó con 33 municipios (prevalencias de desnutrición superiores a 70%), el grupo 2, de 50 municipios (superiores a 60% y menores de 70%) y el grupo 3 con 83 municipios (de 42.9% a menos de 60%). La desnutrición crónica la padece en mayor medida la población rural, agravándose en las niñas rurales frente a las urbanas (del 50.6% a 62.4%). Por su parte la prevalencia general de anemia en las niñas de 6 a 59 meses de edad es de 33.6 %. La prevalencia de sobrepeso u obesidad entre las mujeres no embarazadas de 15 a 49 años es de 45.2 %. Además, el 15.6 % de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad presenta anemia (Anexo 1, Tabla 7).

73. El riesgo de complicaciones obstétricas asociado a una talla baja (menor a 145 cm de estatura) de la mujer que enfrenta un parto está presente en 40.3 % de la población de los municipios priorizados. Este riesgo es mucho mayor en la población femenina en edad fértil de las áreas rurales. La implicación de esto es que aquellas niñas que presentaban baja talla en 2008 ahora son las mujeres

adolescentes que, además de presentar una baja talla, en la actualidad se encuentran en riesgo de embarazo temprano. En los 83 municipios cuya prevalencia de desnutrición crónica es relativamente menor, la proporción de adolescentes actuales con una talla baja que representa riesgo obstétrico, es de 33.4 %, siendo superior a la media nacional informada por la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) de 2,008.

74. La niñez comprendida entre los seis a once meses de edad presenta una prevalencia de anemia de 71% y desciende gradualmente conforme avanza la edad, sugiriendo reforzar las buenas prácticas de cuidado prenatal y las buenas prácticas obstétricas. El 40.3 % de las mujeres (15 a 49 años de edad) presenta una talla inferior a 145.0 cm, talla considerada de muy alto riesgo obstétrico y también como factor de riesgo para tener un bajo peso al nacer. Esta se presenta superior entre las mujeres del área rural (42.5 %) comparadas con las del área urbana (32.7 %).

75. Para dar cumplimiento a la Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala 2015-2025 el MSPAS ha diseñado y actualizado estrategias de comunicación con pertinencia cultural sobre las prácticas que realizan a través del Plan de Sensibilización para el reconocimiento de la labor de las Abuelas Comadronas. Los diálogos interculturales e intercambio de experiencias y prácticas de salud cuentan con una propuesta metodológica para mejorar y fortalecer el relacionamiento entre comadronas y personal de los servicios de salud. Para garantizar el respeto entre comadrona y proveedores, se solicitó a todo el personal viabilizar su ingreso a los servicios de salud. Asimismo, existe un enlace para el intercambio de conocimientos y saberes desde la cosmovisión de los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo.

76. Se ha elaborado el “Listado de insumos y equipo básico para la atención del parto comunitario con organizaciones de comadronas” a través de la mesa técnica interinstitucional y la propuesta de emisión del carné para facilitar la identificación y labor que realiza con la comunidad y el servicio médico. Para incorporar gradualmente la atención que comprende brindar la atención en el idioma según la comunidad lingüística, se está gestionando un convenio de cooperación técnica con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala para la revisión, traducción de material didáctico y comunicacional, apoyo técnico en la traducción de mensajes claves y el aprendizaje de un idioma maya al personal de salud.

77. Con respecto a la violencia sexual, embarazo forzado y maternidad forzada en niñas y adolescentes, se ha formulado la propuesta de Política Pública de Reparación Digna y Transformadora para Casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes y su Plan de acción 2016-2026. Actualmente se encuentra en proceso de revisión y readecuación por parte de la SEPREM a través de la CONAPREVI.

78. A partir de las medidas orientadas a prevenir y reducir los embarazos en la adolescencia, el MSPAS integra esfuerzos técnico-normativos, operativos, de gestión y planificación que responden al Plan Nacional para la Prevención de Embarazos en Guatemala (PLANEA) y la Política Nacional de Juventud. El MSPAS cuenta con una normativa para la atención integral y diferenciada que incluye un paquete básico de atención que responde al derecho de la salud. Este comprende las acciones de promoción, las acciones de prevención y las de atención según demanda donde se atienden 3000000 consultas de adolescentes. Además, se instalaron a través de la estrategia de espacios amigables para adolescentes y jóvenes, 532 espacios, atendiendo a 35141 adolescentes (51% mujeres y 49% hombres).

79. En cuanto las medidas adoptadas para la reparación de mujeres víctimas de violencia sexual, a partir del año 2,011 se brinda una atención integral y especializada en 42 clínicas ubicadas en 38 hospitales de la Red Hospitalaria

Nacional. Según el protocolo de atención a las víctimas, las medidas dependerán sobre la condición de estabilidad de la víctima.

80. Como parte de la Ruta de Atención a niñas y adolescentes embarazadas, el MIDES otorga el bono seguro por violencia sexual dirigido a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, embarazadas o madres de catorce o menos años de edad, cuyos casos ya hayan sido judicializados. Contempla entregar una transferencia monetaria condicionada de forma periódica para promover el acceso a los servicios de salud con valor de Q 300.00. Dentro de los criterios de elegibilidad se encuentra: a) niñas y adolescentes guatemaltecas o naturalizadas, embarazadas o madres que hayan sido víctimas de violencia sexual de catorce o menos años de edad, b) que se haya iniciado el proceso de denuncia ante los órganos jurisdiccionales, c) que las niñas y adolescentes cuenten con una persona titular y d) que las niñas y adolescentes no hayan contraído matrimonio o convivan con pareja.

81. En relación a los abortos terapéuticos, la práctica médica según el Código Deontológico del Colegio de Médicos y Cirujanos, no se especifica en el país. Si hubiera abortos terapéuticos en algunos hospitales, deben llenar requisitos dentro de los consensos médicos y ser sometidos a criterios éticos y profesionales para realizarlos tal como se cita en el Código Penal en su capítulo III, artículo 137. Los abortos que se han atendido en los servicios de salud del tercer nivel de atención contemplan la atención médica de las pacientes en aras de que sean atendidas pronta y oportunamente, evitando las causas de muertes en mujeres en edad fértil. Se han diagnosticado 2331 abortos médicos entre el 2010 y 2017. Por otro lado, los abortos provocados se consideran un acto criminal tipificados en el Código Penal.

Mujeres rurales

82. Con respecto a las medidas concretas para el empoderamiento de las mujeres, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha iniciado el proceso de institucionalización del enfoque de igualdad de género a partir de la aprobación de la Política Institucional para la Igualdad de Género y Marco estratégico de implementación 2,014-2,023 en la que se abordan: a) fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres rurales, su participación en la toma de decisiones a nivel social, comunitario y político; mediante la promoción de buenas prácticas para el empoderamiento y la igualdad de género b) fomentar las capacidades productivas, de comercialización y empresariales de las mujeres rurales mediante el acceso equitativo a los recursos, incentivos, asistencia técnica e insumos que brinda el MAGA. Además, como medidas que promueven el empoderamiento económico de las mujeres rurales, su acceso a la tierra y al crédito, se presentó la propuesta que facilita el acceso a la tierra a través del punto resolutivo 99-2016 para facilitar a las mujeres Campesinas, Mayas, Xincas, Garífunas y Mestizas su acceso.

83. El MAGA ha apoyado proyectos exclusivos para mujeres a través de recursos no reembolsables. Estos se han destinado para el fortalecimiento de capacidades financieras en la participación de las mujeres rurales, dotación de insumos para mejorar la producción agropecuaria de las mujeres, apoyo para la adquisición de equipo e insumos para procesos de cadenas de valor. El monto desembolsado comprendido entre el 2009 al 2014 ha sido por un valor de Q 11.32 millones, dirigidos a 21 organizaciones de mujeres, estimándose un total de 7,504 mujeres beneficiarias. En el 2,015 debido al cambio de figura de organización a cooperativa para el acceso a recursos, se ha dificultado el acceso de las organizaciones y asociaciones de mujeres, por lo cual el monto se redujo a Q 1.65 millones con un total de 363 beneficiarias. Para el año 2,017 se han programado 2.79 millones con un estimado de 275 mujeres receptoras.

Grupos de mujeres desfavorecidas

84. Dentro de los servicios consulares, el MINEX brinda a favor de las mujeres migrantes, la documentación consular, la asistencia y atención consular y la protección consular. Dentro de los servicios prestados a mujeres en el exterior se han realizado durante el período 2015-2017 la atención a 762,666 mujeres. Además, realiza campañas informativas sobre sus derechos para empoderarlas y brinda orientación legal en caso deseen aplicar a la regularización migratoria.

85. Sobre las trabajadoras temporales que migran con un contrato de trabajo y permiso laboral, las misiones consulares se ocupan de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, constatan que las condiciones de vivienda correspondan a los estándares establecidos, se aseguran que reciban un trato justo y sin distinción, facilitan la orientación legal, así como se ocupan de brindar atención a casos de urgencia. Sobre las medidas adoptadas para la reinserción en la sociedad de mujeres migrantes deportadas, el MINEX se encuentra articulando esfuerzos con entidades de gobierno, sector privado y sociedad civil para contribuir a un planteamiento nacional para la inclusión social y laboral a través del programa “Guate te incluye”.

Matrimonio y relaciones familiares

86. El Acuerdo de Directorio 42-2010 que regula el procedimiento para la inscripción de matrimonios en el Sistema de Registro Civil en el RENAP señala el requerimiento del documento que acredita el matrimonio entre menores de edad, para lo cual se necesita además de la autorización de los padres, el certificado de nacimiento, el documento personal de identificación de los padres y aviso circunstanciado donde el notario hará constar que comparecieron los padres, quienes lo autorizaron. Los registradores están tomando como autorizaciones, las emitidas por un notario o por el ministro de culto donde señalan que han sido los padres los que autorizaron. El aviso debe darse en el Registro Civil de las Personas en la circunscripción municipal donde se haya celebrado el mismo, en un plazo no mayor a 30 días. No obstante, este plazo no es respetado y solo es sujeto de multa económica, sin importar la temporalidad en el que se realice posteriormente. Esto da lugar a inscribir matrimonios con fecha anterior a la reforma.

87. De acuerdo a la reforma al Código Civil, se establece la excepcionalidad cuando involucren menores. De acuerdo a la reforma, deben existir razones fundadas para autorizar este tipo de matrimonios por lo que la CSJ emitió el Acuerdo Número 12-2016 que regula el órgano jurisdiccional y el procedimiento respectivo³. Sin embargo, solamente se emitieron durante el año de vigencia de la reforma, 103 resoluciones para autorizarlos frente a los 1115 matrimonios celebrados.

88. La autorización excepcional para autorizar un matrimonio de menores de edad, con edad cumplida de 16 años, deberá ser presentada ante el juez competente, quién decidirá en una sola audiencia su autorización. Este requisito no ha sido aplicado y se infiere en la creación de un subregistro entre matrimonios notariales o por ministros de culto y autorizaciones realizadas por juez. Asimismo, el manejo discrecional sobre el Protocolo a cargo de los Notarios, impide verificar con exactitud la edad y fecha de celebración de los matrimonios. El Archivo General de Protocolos es la institución que debe tener copia fiel de los instrumentos que autorizan los Notarios, pero la falta de entrega de testimonios especiales solamente genera sanción económica de Q 25.00 por cada documento. Es importante, por lo

³ La resolución señala que el juez debe velar por el interés superior del niño, solicitar opinión de la PGN sobre la procedencia de la autorización, adjuntando informe socioeconómico, estudio psicológico y otros que considere pertinentes.

tanto, la eliminación de la excepción del matrimonio entre menores dentro del Código Civil. En el Congreso de la República la iniciativa 5216 tiene dictamen favorable por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Esta propone la reforma al artículo 82 y 83 del Código Civil señalando la prohibición y la no autorización de manera alguna, del matrimonio de menores de 18 años de edad.

89. El matrimonio entre menores de edad es una forma de violencia contra la mujer que se encuentra institucionalizada a partir del establecimiento de la excepcionalidad. Esta figura permite que la mujer menor edad se presente como una persona a la que hay que tutelar y sin la capacidad de ejercer sus derechos.
